**HOY LUNES 25
DE FEBRERO DE 1991**

■ PLAZA PUBLICA

Miguel Angel Granados Chapa

- Inconstitucionalidad y política**
- Senadora y gobernadora a la vez**

Durante una semana, Dulce María Sauri Riancho fue, al mismo tiempo, senadora por Yucatán y gobernadora de ese mismo estado, a título interino. Ningún malabarismo jurídico puede obviar ese hecho incontrovertible, como tampoco es posible disimular la gravedad de la violación constitucional implicada en esa simultaneidad, aduciendo importantes razones políticas,

■ 4

porque no hay razón política más relevante que cumplir el derecho.

El artículo 62 de la Constitución no deja lugar a dudas. Dispone claramente, sin necesidad de interpretación alguna, que "los diputados y senadores propietarios, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados, por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva, pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador".

En la Comisión Permanente del Congreso, que para este efecto suple al Se-

nado en su receso, se alegó la semana pasada, para justificar el grave desliz yucateco, que era de aplicarse el artículo 125 de la Constitución, lo cual es al menos discutible, pues si bien es cierto que concede a los interesados la facultad de optar entre dos cargos —la senaduría o la gubernatura, en el caso que nos ocupa—, también lo es que se refiere a cargos ambos de elección popular. Y la gubernatura interina, que es la posición a que se comisionó a la licenciada Sauri Riancho, no es un cargo de elección, sino de designación, efectuada por la legislatura local. Tal artículo dispone que "ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni otro en un Estado que sea también de elección, pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar".

Aun si fuera enteramente aplicable al caso, la estipulación del 125 no puede entenderse desvinculada del 62. No se re-

fieren a situaciones diversas, sino a la misma, siendo así que el 62 establece el mecanismo para hacer posible la opción dispuesta en el 125, y las sanciones por la infracción respectiva. La sola lectura de los textos permite asegurarlo. Pero a mayor abundamiento cito a este respecto el parecer del abogado Amador Rodríguez Lozano, quien asegura que "este precepto, conjuntamente con la norma establecida por el artículo 62 de la Constitución, consigna las llamadas incompatibilidades parlamentarias". Rodríguez Lozano, digámoslo para ubicar su juicio, fue senador priísta, es subsecretario de acción electoral de su partido, representante del mismo en el Instituto Federal Electoral y frecuente exégeta de posiciones del propio PRI o el gobierno.

El propio Rodríguez Lozano, en una edición comentada de la Constitución, editada por el Departamento del Distrito Federal, explica que "la posibilidad de

realizar una función pública distinta de la de diputado o senador, sólo cabe mediante licencia de la Cámara respectiva, con la consiguiente cesación en el cargo representativo". Y añade, enfático: "Igual consecuencia opera si el senador o diputado no obtuvo previamente dicha autorización. Sólo que en este último caso la separación de la función representativa será en forma definitiva como castigo a la infracción cometida".

Obviamente, solicitar la licencia no equivale a obtenerla. Suponerlo entraña privar de todo sentido a la acción deliberativa del órgano que debe concederla. Aunque la licencia hubiera sido pedida antes de la asunción de su nuevo cargo, la socióloga Sauri Riancho la obtuvo sólo siete días después. Y que no se trata de un tiquismiquis lo prueba la dura sanción dispuesta por el precepto constitucional, consistente en la pérdida de la investidura.